



Proceso	Servidumbre de Energía Eléctrica
Demandante	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Demando	CNR III LTD. Sucursal Colombia en Reorganización, Colombiana Natural Resources I S.A.S (En Reorganización y C.I. Prodeco S.A.
Procedencia	Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Radicado	05001 31 03 012 2022 00392 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Auto	No. 001
Decisión	Revoca
Tema	Imposición de servidumbre eléctrica
	<p>2. Lo que lo antecedentes denotan es lo que en otrora la Dra. María Euclides Puerta Montoya llamara derroche de jurisdicción tiempo y dinero, puesto que, no solo como lo señaló la Corte en sentencia SC4658 de 2020, la Ley 56 de 1981 tiene establecido un procedimiento especial, que luego fue desarrollado en el Decreto Reglamentario 2580 de 1985, actualmente compendiado en el Capítulo VII, Sección 5, del Decreto 1073 de 2015, cuyo canon 2.2.3.7.5.3. señala de manera diáfana que en el auto admisorio de la demanda <b>se ordenará la inscripción de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble, si esta petición ha sido formulada por el demandante</b>, sino por cuanto el artículo 592 del C. General del proceso señala que en los procesos de servidumbre el juez ordenará de oficio la inscripción de la demanda antes de la notificación del auto admisorio al demandado.</p> <p>3. Luego, en este caso en el acápite IV de la demanda, denominado <b>“inscripción de la demanda”</b>, la actora expresamente petitionó que se oficiara al Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de</p>

	Chimichagua, ordenando la inscripción de la demanda en el folio real No. 192-10743, correspondiente al predio “El Rosario”, ubicado en la vereda El Paso, jurisdicción del municipio de El Paso, departamento del Cesar, además señaló, que <i>“en la forma y para los fines indicados en el numeral 1º del artículo 590 de la ley 1564 de 2012 y el artículo 592 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 3º, numeral 1º del Decreto 2580 de 1985 integrado al Decreto 1073 de 2015”</i> , por lo que la exigencia de la conciliación prejudicial se tornó caprichosa o arbitraria, ante la claridad del parágrafo del artículo 590 del código del rito vigente.
--	---

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**

**2022-103**

**SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN**

**Medellín, once (11) de enero de dos mil veintitrés (2023)**

Se decide por el Tribunal el recurso de apelación interpuesto la apoderada judicial de la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S. – ISA ESP frente al auto del 2 de noviembre pasado proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, mediante el cual se rechazó la demanda de Imposición de Servidumbre formulada en contra de la sociedad CNR III LTDA. Sucursal Colombia en Reorganización, Colombiana Natural Resources I S.A.S. en Reorganización y la sociedad C.I. Prodeco S.A.

**I. ANTECEDENTES**

a) Correspondió por reparto al Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín la demandada se imposición de servidumbre

eléctrica adelantada por sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S. – ISA ESP en contra de las sociedades CNR III LTDA. Sucursal Colombia en Reorganización, Colombiana Natural Resources I S.A.S. en Reorganización y C.I. Prodeco S.A.

**b)** Por auto del 11 de octubre último, la juez de conocimiento inadmitió la demanda, para que la parte actora cumpliera con los siguientes requisitos:

“1. Deberá aportar constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 38 de la ley 640 de 2001 modificado por el artículo 621 del Código General del Proceso, advirtiéndole desde ya que en este trámite no es posible aplicar el artículo 613 de la citada normatividad, en tanto que allí se regula la conciliación “en materia administrativa”, siendo este un trámite puramente civil, además porque no resulta de recibo el argumento referido a la medida cautelar, en el entendido de que esta medida se decreta “de oficio” en este tipo de juicios, tal como lo prevé el artículo 592 de la misma normatividad. Por tanto, atendiendo a esta previsión normativa de cara al artículo 38 de la ley 640 citada que fue modificada por el artículo 621 del Código General del Proceso, y que las servidumbres se tramitan bajo el proceso “verbal”, no encuentra este Despacho razón para no exigir el agotamiento del mecanismo de conciliación extrajudicial, cuando se trata de un asunto netamente conciliable, situación que en materia de “servidumbres” fue dirimida por la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-1195 de 2001, cuando afirmó:

*“En ese orden de ideas, deberá agotarse el trámite conciliatorio previo en las disputas patrimoniales relativas, por ejemplo, a los modos de adquirir el dominio, el uso, goce y posesión de los bienes, servidumbres, excepto lo relativo a la validez de la tradición y los procesos de expropiación y divisorios, expresamente excluidos. (...)”*

*“Por lo anterior, en materia civil y comercial el legislador determinó con suficiente claridad los asuntos frente a los cuales se exige intentar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.”*

“Consideraciones estas, que no riñen con la normatividad procesal en vigencia, en tanto que el Código General del Proceso reguló el trámite de procesos de servidumbre dentro del título del Proceso Verbal, luego,

al no tratarse de un proceso divisorio, expropiación, o de aquéllos en dónde sea obligatoria la citación de indeterminados, a más de tratarse de un “*asunto conciliable*”, resulta necesario acreditar el agotamiento de esta audiencia prejudicial.

“De esta manera el requisito debe ser aportado en el caso concreto, so pena de inadmisión de la demanda, tal como expresamente lo señala expresamente el numeral 7 del artículo 90 del Código General del Proceso.

“Como el inciso 3° del artículo 90 del Código General del Proceso, establece que el Juez declarará inadmisibile la demanda *mediante auto no susceptible de recursos* cuando no reúna los requisitos formales y no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, y, que concederá a la parte demandante el término de cinco (5) días con el fin que subsane los defectos de los cuales adolece, es que se inadmitirá ésta y se concederá el término allí establecido”.

**c)** Dentro del término concedido la apoderada de la parte actora presentó escrito con el que pretendió subsanar dicho requisito, para lo cual expuso que no resulta de recibo el argumento que se refiere a la solicitud de medidas cautelares, puesto que, la forma en la que se solicitan las medidas cautelares en el proceso especial de imposición de servidumbre se establece en el artículo 2.2.3.7.5.3 del Decreto 1073 de 2015, por lo que la solicitud de medidas cautelares en este tipo de procesos es formulada por la parte demandante, por tal razón, esta no está obligada a cumplir con el mecanismo de la conciliación extrajudicial, razón suficiente para que el juzgado se abstenga de exigirlo. Por lo anterior, solicitó al despacho que tuviera por subsanada esta causal de inadmisión y se procediera con la admisión de la demanda.

**d)** Mediante providencia del 2 de noviembre, la *a quo* rechazó la demanda por considerar que no eran de recibo los argumentos esbozados por la parte demandante para no cumplir con la exigencia hecha por el Despacho de aportar el requisito de

procedibilidad, porque el artículo 592 del C. General del Proceso es una norma posterior a la ley 56 de 1981 y es el que ahora regula el procedimiento en esta clase de procesos.

**e)** Contra la anterior, decisión la actora formuló recurso de apelación con fundamento en las siguientes consideraciones que se resumen así:

**(i)** La posición del Despacho está en contravía de la interpretación hecha por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC4658 de 2020, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, donde se analiza el artículo 2.2.4.7.5.3 del Decreto 1073 de 2015.

**(ii)** Que el mentado fallo constituye -por decirlo de alguna manera- un precedente sobre cómo interpretar el carácter especial y la prevalencia de las reglas contenidas en la Ley 56 de 1981 y su posterior Decreto único Reglamentario, 1073 de 2015, que regulan los procesos de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica. Por ello, la interpretación de la Corte, como Tribunal de cierre en lo civil, debe observarse para comprender que la exigencia de la *“constancia de haber agotado el requisito de procedibilidad”*, desborda los requisitos de la demanda especial regida por la Ley 56 de 1981 y el Decreto 1073 de 2015.

**(iii)** Otro punto en que se debilita el argumento del juzgado de primera instancia es la diferencia que existe entre las medidas cautelares rogadas y aquellas que operan de oficio. Desde el auto inadmisorio la juez de conocimiento advirtió desde su inicio a la entidad demandante que, *“no resulta de recibo el argumento referido a la medida cautelar, en el entendido de que esta medida*

*se decreta “de oficio” en este tipo de juicios, tal como lo prevé el artículo 592 de la misma normatividad”.*

(iv) Que no puede el despacho exigir como requisito de procedibilidad la realización de la conciliación, cuando, no sólo no está taxativamente regulado, sino que, en el presente caso, se solicitó al despacho el decreto y la práctica de la medida cautelar de inscripción de demanda, que tiene como finalidad, garantizar la efectividad de la sentencia que en derecho profiera el juzgado de conocimiento, frente a cualquier cambio de titularidad del predio objeto de litigio.

(v) Tal como se expuso en la subsanación a la demanda, dicho criterio es errado, puesto que, de la literalidad del artículo 2.2.3.7.5.3. del Decreto 1073 de 2015 (norma especial que regula este proceso), se deduce, sin excitación alguna, que la inscripción de la demanda en el proceso especial de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica es facultativa de la entidad demandante.

f) Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes;

## **II. CONSIDERACIONES**

1. La iniciación del proceso civil, en virtud del derecho de acción, se realiza a través de la demanda, como instrumento previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella, que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, por ineptitud de esta con una sentencia inhibitoria. Es por ello, que la demanda debe ajustarse a determinados

requisitos establecidos de manera general en el artículo 82 del Código General del Proceso, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 83 ibídem.

La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario tendrá inadmitida para que sea subsanada dentro del término de cinco (5) días o ser rechazada, tal y como lo prevé el artículo 90 ib., pues el rechazo de la demanda impone al juez la obligación de verificar si las formalidades previstas por el legislador han sido satisfechas al momento de ejercer el derecho de acción. A su vez el citado canon en su numeral 7º consagra como causal de inadmisión el hecho que no se acredite haberse agotado la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

2. Lo que lo antecedentes denotan es lo que en otrora la Dra. María Euclides Puerta Montoya llamara derroche de jurisdicción tiempo y dinero, puesto que, no solo como lo señaló la Corte en sentencia SC4658 de 2020, la Ley 56 de 1981 tiene establecido un procedimiento especial, que luego fue desarrollado en el Decreto Reglamentario 2580 de 1985, actualmente compendiado en el Capítulo VII, Sección 5, del Decreto 1073 de 2015<sup>1</sup>, cuyo canon 2.2.3.7.5.3. señala de manera diáfana que en

---

<sup>1</sup> Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.

el auto admisorio de la demanda **se ordenará la inscripción de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble, si esta petición ha sido formulada por el demandante**, sino por cuanto el artículo 592 del C. General del proceso señala que en los procesos de servidumbre el juez ordenará de oficio la inscripción de la demanda antes de la notificación del auto admisorio al demandado.

3. Luego, en este caso en el acápite IV de la demanda, denominado **“inscripción de la demanda”**, la actora expresamente peticionó que se oficiara al Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Chimichagua, ordenando la inscripción de la demanda en el folio real No. 192-10743, correspondiente al predio “El Rosario”, ubicado en la vereda El Paso, jurisdicción del municipio de El Paso, departamento del Cesar, además señaló, que *“en la forma y para los fines indicados en el numeral 1º del artículo 590 de la ley 1564 de 2012 y el artículo 592 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 3º, numeral 1º del Decreto 2580 de 1985 integrado al Decreto 1073 de 2015”*, por lo que la exigencia de la conciliación prejudicial se tornó caprichosa o arbitraria, ante la claridad del párrafo del artículo 590 del código del rito vigente.

4. Por lo expuesto, se REVOCARÁ el auto recurrido y en su lugar se dispondrá que se resuelva sobre la admisión o no de la demanda haciendo abstracción del requisito que se consideró echado de menos.

### III. DECISION



**EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA CIVIL DE DECISIÓN UNITARIA, REVOCA** el el auto del 2 de noviembre último, proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, mediante el cual se rechazó la presente demanda de imposición de servidumbre eléctrica adelantada la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S. – ISA ESP en contra de la sociedad CNR III LTDA. Sucursal Colombia en Reorganización, Colombiana Natural Resources I S.A.S. en Reorganización y la sociedad C.I. Prodeco S.A, y en su lugar se dispone que se resuelva sobre el proveimiento o no del auto admisorio, haciendo abstracción del requisito que consideró ausente.

**NOTIFIQUESE**

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

Firmado Por:  
Juan Carlos Sosa Londono  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 001 Civil  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e8dcc6799f08c14225a79bba04ac7bf2f83984ddf7f498453561ed9d5812958f**  
Documento generado en 18/01/2023 08:57:47 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**